

TRIBUNA

Percepción social de la corrupción política

LAS noticias sobre corrupción se han instalado en los medios de comunicación como tema de información preferente. Dos razones podrían explicar este hecho: la utilización de este tema, que siempre tiene mucho morbo para la opinión pública, como artina de humo para no inar sobre otras cuestiones más graves e importantes, o su utilización por los políticos como par-



Juan Díez Nicolás
Sociólogo

te de su estrategia electoral ante las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2007.

Desde que se transfirieron

las competencias de urbanismo a los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España, había que ser muy optimista para pensar que una proporción de ellos no intentaría beneficiar de manera ilegal a su ayuntamiento, a su partido, o a sí mismos.

Puesto que todos los procesos legales e informativos abiertos implican a muy diferentes partidos políticos, cabe pensar que las infor-

maciones surgen ahora para desviar la atención de otras cuestiones más importantes, como las derivadas de la discusión y/o aprobación de ciertos estatutos de autonomía, o las derivadas del proceso iniciado por el Gobierno para lograr la permanente desaparición de la organización terrorista ETA.

La hipótesis de que se intenta utilizar la corrupción urbanística en la estrategia

electoral parece menos plausible, puesto que al estar afectados casi todos los partidos políticos por presuntos o probados casos de corrupción, no parece que la estrategia del *ventilador* pueda beneficiar a ninguno en particular, cuando está ya perjudicando a toda la clase política.

La opinión pública ha percibido el incremento de la corrupción o el de las informaciones sobre ésta, de

manera que en los más recientes sondeos de ASEP la preocupación por este tema se coloca en quinto lugar (un 90% de los españoles creen que hay mucha o bastante en España), triplicando la importancia que se le asignaba en investigaciones precedentes, y que esta corrupción se atribuye principalmente a la construcción, los ayuntamientos, los grandes grupos financieros y los partidos políticos.